
hace más difícil para cualquier gobierno especular con los derechos y libertades humanas básicas. El reforzamiento de una Carta de Derechos favorece también a los derechos de los ciudadanos y limita el poder de los gobiernos. Da a los individuos el poder de apelar a las cortes si consideran que sus derechos han sido negados o violados.

La Carta garantiza numerosos derechos y libertades que requerirán ciertos ajustes y cambios en las leyes de Canadá. Los derechos de igualdad, por ejemplo, garantizan a cualquier ciudadano ser sujeto de igual tratamiento en la ley del país y protección contra la discriminación en los casos de raza, origen nacional, o étnico, color, religión, sexo, edad e impedimentos físicos o mentales.

Por primera vez en la historia canadiense, la constitución reconoce la igualdad de las mujeres. Como tal, los grupos de mujeres pueden defenderse ahora de las leyes que discriminan contra ellas. En vista de que el enfoque de la cláusulas de igualdad es tan extenso y afectará a tantas leyes, éstas no entrarán en vigencia sino hasta tres años después del retorno de la constitución a Canadá.

La Carta también amplía los derechos de los idiomas existentes en Canadá. La posición igualitaria del inglés y del francés como idiomas oficiales de la nación en todas las instituciones del Parlamento y del Gobierno de Canadá, se encuentra reforzado en la Constitución, como lo está también el derecho a la utilización de ambas lenguas en la legislatura y el gobierno de la provincia de Nueva Brunswick. Los derechos previamente asentados en la constitución sobre el uso ya sea del inglés o del francés en las legislaturas y cortes de Quebec y Manitoba continuarán. Además, la Carta añade nuevas garantías sobre los derechos educativos de lenguas minoritarias. Los canadienses que tienen que movilizarse dentro del país, o las minorías anglo o francoparlantes que viven en una provincia de otro grupo lingüístico, podrán educar a sus hijos en su propio idioma.

Más aún, la Carta tendrá que ser interpretada de una manera que no niegue ninguno de los derechos existentes sobre tratados aborígenes establecidos con los pueblos nativos de Canadá; inuit, indios, metis, los cuales están oficialmente afirmados y reconocidos en el Acta de la Constitución.

Finalmente, la Carta protege el principio de movilidad laboral, declarando que todo canadiense es libre de cambiar su lugar de residencia y trabajar en cualquier parte del país. Sin embargo, las provincias mantienen el derecho de

tomar "acción afirmativa" de sus residentes si su tasa de empleo provincial se encuentra por debajo del promedio nacional.

Importancia del Acta de la Constitución para las Provincias

Aunque el Acta de la Constitución no está básicamente comprometida con la distribución de poderes en el sistema federal, hay dos disposiciones constitucionales que beneficiarán directamente a las provincias y a su capacidad de ejercitar sus responsabilidades constitucionales. La práctica aceptada de utilizar ingresos para ayudar a las provincias menos beneficiadas, el principio de compensación, está actualmente incluido en la constitución. Esto significa que el Gobierno de Canadá y todos los gobiernos provinciales están comprometidos constitucionalmente en la promoción de oportunidades iguales para reducir la disparidad de las mismas y proporcionar servicios públicos esenciales de calidad razonable a todos los canadienses. La otra disposición de interés para los gobiernos provinciales en el Acta es la que confirma la autoridad provincial exclusiva sobre recursos naturales y da a las provincias nuevos poderes respecto a la venta interprovincial de recursos y el gravamen indirecto de recursos no renovables.

Importancia del Acta de la Constitución para el Futuro

Finalmente, el Acta de la Constitución proporciona a los canadienses el marco dentro del cual pueden adaptarse las necesidades y circunstancias cambiantes. El proceso reformativo describe por primera vez cómo pueden los canadienses realizar cambios a su constitución a través de los gobiernos nacional y provinciales.

Los cambios futuros requerirán del consentimiento del Parlamento Canadiense y de siete legislaturas provinciales que representan al menos al 50 por ciento de la población de todas las provincias. Ninguna provincia puede vetar las reformas constitucionales y, para algunos temas, incluyendo la monarquía, ciertos derechos lingüísticos y la composición de la Suprema Corte, se requerirá del consentimiento del Parlamento y de todas las legislaturas provinciales.